



Fidel firma la Ley de Reforma Agraria, en la comandancia de La Plata, en la Sierra Maestra, con lo cual cumple el postulado de la Constitución de 1940 de acabar con el latifundio.

CUBA-EE.UU.

El derecho de nacionalizar

Cuba nunca se opuso a la indemnización. Fue Estados Unidos quien lo impidió. La confiscación por bienes malversados constituyó un acto de justicia frente al vandalismo de los acólitos del dictador Fulgencio Batista

Por **LÁZARO BARREDO MEDINA**

EL Premio Nobel de Economía Paul Krugman escribió en *The New York Times* que “ningún hombre es autosuficiente, aunque Trump lo sea más que la mayoría. Así que, para poder comprender la magnitud de sus metidas de pata en las decisiones sobre políticas, es necesario reconocer la extraordinaria calidad de las personas que lo rodean. Claro que cuando digo “extraordinaria”, en realidad quiero decir una ca-

lidad extraordinariamente baja. Lincoln tenía un equipo de rivales; Trump tiene un equipo de imbéciles”.

Eso es lo que estamos observando en los que formulan y ejecutan la política hacia Cuba, que, además de irracional, es bastante desoladora, porque parecen ataques frenéticos, fuera de control, como si la bilis acumulada durante años por tantos fracasos los hiciera más rabiosos, aunque confieso que no se

les puede negar el mérito en la eficacia para disfrazar la verdad ante la opinión pública. Son verdaderos “doctores en Ciencia” en propagar mentiras.

Desde antes de llegar al poder, y aprovechando la visión transaccional que tiene Trump, estos camajanes secuestraron la política hacia nuestra nación y retomaron la agresión para intentar destruir la Revolución. Por eso, reactivan los procesos judiciales y las demandas del Título III de la Ley Helms-Burton, legislación que propugnan con sus imposiciones de cómo tenemos que ser y cómo tenemos que hacer para reconvertirnos con total humillación en un enclave neocolonial.

Es la obtusa obsesión de infundir miedo a los extranjeros para que desistan de invertir en la Isla, pero también a los cubanos, con el argumento de que habrá demandas judiciales y tendremos que devolverles todas las propiedades nacionalizadas o confiscadas desde el 1° de enero de 1959, hayan sido o no de



Con la entrega de los títulos de propiedad de la tierra, se cumplía una promesa del Moncada y una de las expectativas expresadas en el Congreso Campesino en Armas, en Soledad de Mayarí Arriba.

ciudadanos norteamericanos en ese momento, marcando claramente el interés de favorecer a los batistianos que encontraron refugio seguro en los Estados Unidos tras la huida del tirano Fulgencio Batista.

Nacionalización y expropiación

En las normas del Derecho Internacional se contempla la potestad de los Estados de ejercer el principio de la nacionalización para reivindicar bienes tanto de personas naturales como de personas extranjeras, siempre y cuando no se realice por motivos discriminatorios y se adjudique la correspondiente indemnización.

Así, por ejemplo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1974, dispone que "todo Estado tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros, en cuyo caso, el Estado que adopte esas medidas deberá pagar una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos aplicables y todas las circunstancias que el Estado considere pertinente. En cualquier caso en que la competencia sea motivo de controversia, esta será resuelta conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza".

El Gobierno Revolucionario cubano dictó en febrero de 1959 la Ley Fundamental de la República, donde se retomaron los elementos cardinales de la Constitución de 1940, la cual proscribió el latifundio y estableció la expropiación forzosa por causa de utilidad pública e interés nacional (que no pudieron llevarse a cabo, pues nunca en la República neocolonial se

hicieron las leyes complementarias para ejecutar ambas disposiciones).

Cuba nacionalizó las propiedades estadounidenses, entre mayo de 1959 y octubre de 1960, como parte de los principios establecidos en su legislación a partir de la Ley de Reforma Agraria, el 17 de mayo de 1959, que acabó con el latifundio, y otras medidas como la Ley 851, del 6 de julio de 1960, en la cual se establecieron también los mecanismos de indemnización.

La destacada y reconocida jurista Olga Miranda Bravo dejó antes de fallecer numerosos textos de conferencias impartidas en organismos nacionales e internacionales, así como libros, sobre las nacionalizaciones y el bloqueo, puesto que en 1992, durante los primeros debates en la ONU de la resolución de denuncia del cerco, el Gobierno estadounidense justificó la aplicación de esas medidas coercitivas y extraterritoriales contra nuestro país asegurando que eran esencialmente una respuesta a la nacionalización de los bienes pertenecientes a los Estados Unidos.



Las empresas petroleras estadounidenses informaron que no enviarían más petróleo a la Isla y prohibieron a sus refineras en la nación antillana que procesaran el combustible de otras fuentes, no obstante que la Ley cubana de Minerales y Combustibles, vigente desde el 9 de mayo de 1938 establecía la obligatoriedad de esas compañías de procesar el crudo que el Estado le suministrara. Fueron nacionalizadas.

El 9 de julio de 1993 el representante permanente de Cuba ante la ONU entregó al Secretario General una carta y un extenso documento elaborado por un grupo de expertos a solicitud del Gobierno cubano, donde se prueba claramente que el programa de coerción económica determinó siempre el interés de las autoridades de Washington de presionar para imponer el sistema político del agrado de Estados Unidos, mientras que nunca aceptaron ninguna de las propuestas presentadas por la nación antillana para indemnizar a los propietarios nacionalizados.

También carece de todo fundamento el argumento esgrimido por EE.UU. de que la nacionalización efectuada por Cuba fue ilegal y discriminatoria, puesto que dicho proceso incluyó propiedades de nacionales de otros países. Excepto EUA, el resto adoptó una posición respetuosa en relación con la decisión soberana y establecieron negociaciones con las autoridades de La Habana para la compensación a sus ciudadanos por las propiedades que estos tenían en la Isla. De esta forma, se concluyeron acuerdos con Francia, Suiza, Gran Bretaña, Canadá, España, entre otros, para efectuar las compensaciones, estableciendo plazos para su ejecución acordes a la práctica internacional.

Otra aclaración importante que hizo la destacada jurista Olga Miranda deslinda el asunto de los ciudadanos de origen cubano, al subrayar que independientemente del proceso de nacionalización, se efectuó la confiscación de los bienes malversados, mediante procedimientos establecidos en la ley, tanto por vía judicial como administrativa.

Tal era la magnitud del fraude y del robo, que se creó el Ministerio de Recuperación de Bienes Malversados, para determinar en cada caso, mediante escrupuloso expediente, los productos de notorias operaciones fraudulentas e ilícitas, o legitimados adicionalmente por la fuga en masa de sus gestores, propietarios y cómplices,



muchos de los cuales desde los meses finales de 1958 venían trasladando cuantiosas sumas a bancos norteamericanos, y casi todos creyeron que este era un proceso transitorio, pues Estados Unidos nunca permitiría una Cuba independiente, e imaginaron que seguramente en cuestión de meses intervendría al país. Puede encontrarse en la **Gaceta Oficial de la República de Cuba** de aquellos años la relación de personas naturales o jurídicas sancionadas.

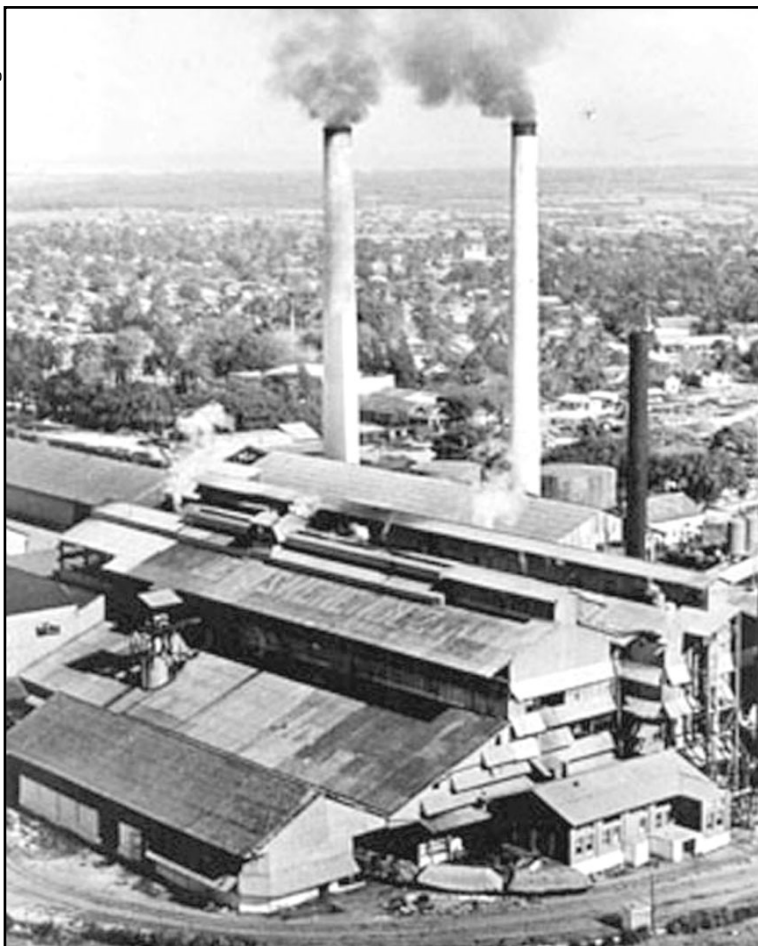
Por supuesto, señaló la doctora Miranda, como la confiscación presupone un hecho punible, estos casos no llevan compensación alguna, de ahí su diferencia sustancial con la nacionalización, que no es una sanción y que conlleva la indemnización adecuada.

Ahora procuran confundir y encubrirse muchos de los reclamantes de la Helms-Burton de origen cubano que fueron realmente confiscados y no nacionalizados, por lo que no tuvieron ningún derecho a compensación.

Esta acción de la Helms-Burton, además de lo inmoral que resulta, vulnera los límites establecidos por el Derecho Internacional, que no confiere derechos retroactivos a los ciudadanos por naturalización.

Con respecto al derecho a nacionalizar, es reconocido por no pocas personalidades e instituciones norteamericanas que Estados Unidos siempre actuó en el marco de la coerción. Desde el primer momento se negó a la aplicación de la fórmula compensadora propuesta por Cuba, que era plenamente compatible con la práctica internacional. La soberbia hegemónica impidió a la Administración de Eisenhower aceptar la decisión nuestra de igualdad soberana para indemnizar a los nacionalizados, no por la forma en que fue concebida, sino por el criterio de que sus nacionales no podían ser objeto de expropiaciones.

Por el contrario, asumió formas que convertirían después a esas reclamaciones en rehén de su política. Básicamente impuso a los afectados un modelo de solución que permitió al Gobierno de EE.UU. asumir la negociación. El programa de reclamaciones que elaboró durante cerca de ocho años (1964-1972) las concentró en 5 911 casos de estadounidenses al momento de la nacionalización, aunque solamente una veintena de empresas tienen casi el 87 por ciento del monto reclamado.



El Gobierno norteamericano impidió la posibilidad de indemnización al quitarle a Cuba la cuota azucarera para tratar de estrangularla.

Cuba siempre se manifestó por indemnizar

El investigador Alejandro Aguilar, titular del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, ha publicado diversos análisis sobre este tema, que, sin duda, se ha convertido en una cuestión de seguridad nacional para la Isla. A partir de las causas por las que los estadounidenses no recibieron la compensación por las propiedades nacionalizadas, él se ha preguntado: ¿Obedece acaso a una falta de voluntad política de Cuba para ello? ¿Pudo Cuba enfrentar económicamente la liquidación de las indemnizaciones y bajo qué condiciones? ¿Propició EE.UU. un clima adecuado para llevar a cabo las negociaciones y la indemnización? ¿Mantienen vigencia las reclamaciones estadounidenses después de casi seis décadas de bloqueo, agresiones diversas y una sistemática hostilidad?

En una enjundiosa argumentación, el doctor Aguilar señaló que la Ley de Reforma Agraria promulgada el 17 de mayo de 1959 estaba encaminada a potenciar la economía agropecuaria del país, eliminando la posesión improductiva de la tierra y, en particular, el latifundio, el cual, insistamos, estaba proscrito ya en la Constitución aprobada en 1940. Para ofrecer una idea: el Censo Agrícola Nacional de 1946 había puesto de manifiesto esta situación cuando informaba que el 15 por ciento de los propietarios disponían casi del 50 por ciento de las fincas.

En sus comentarios, el estudioso enfatizó que la Ley también reconoció el derecho constitucional de indemnización y estableció el pago mediante Bonos de Reforma Agraria, redimibles en 20 años, con interés anual no mayor del 4.5 por ciento, para lo cual se incluirían

los fondos en el presupuesto de cada año. Estableció, además, una excepción del impuesto sobre renta personal a aquellos receptores de bonos que inviertan estos fondos. “Las condiciones de amortización de las indemnizaciones superaban con creces las que se establecieron por los propios Estados Unidos a los terratenientes en la reforma efectuada durante su ocupación del Japón”, subrayó.

Aguilar igualmente rememora que desde la promulgación de la Reforma Agraria las autoridades cubanas informaron su disposición a examinar con el Gobierno de EE.UU., en un plano de igualdad y de respeto mutuo, el tema de la indemnización a los nacionales estadounidenses, al propio tiempo que demandaba a ese Ejecutivo que se abstuviera de tomar cualquier medida que pudiera interferir en la marcha de las negociaciones.

Sin embargo, como acción presionadora, la administración norteamericana solo aceptó que esa expropiación llevara consigo el pago de una pronta, adecuada y efectiva compensación, algo verdaderamente irracional, pues conocían perfectamente que los personeros de la tiranía que usurpó el poder en Cuba desde 1952 con su total apoyo habían saqueado las arcas de la nación, robando y malversando más de 460 millones de dólares de las reservas monetarias internacionales del país, y habían dejado un saldo de deuda pública de más de 1 300 millones de dólares.

Otro elemento importante que destaca el investigador es que a comienzos de junio de 1960 las empresas petroleras estadounidenses informaron que no enviarían más petróleo a Cuba y prohibieron a sus refinerías en el territorio insular que procesaran el hidrocarburo de otras fuentes, no obstante que la Ley cubana de Minerales y Combustibles, vigente desde el 9 de mayo de 1938, establecía la obligatoriedad de esas empresas de procesar el crudo que el Estado le suministrara.

No obstante esa agresión, que pretendía paralizar al país


como parte de la política de provocar la asfixia económica, en la Ley 851 de 1960 que autoriza la nacionalización de las empresas estadounidenses se consideró la compensación de los bienes afectados.

El titular del Instituto Nacional de Investigaciones Económicas recalcó que esa Ley nacionalizadora, en el artículo No. 5, estableció el pago por los bienes expropiados con bonos de la República, que se amortizarían en un plazo no menor de 30 años a partir de la fecha de expropiación y con un interés no menor del dos por ciento, para lo cual se crearía el Fondo para el Pago de Expropiaciones de Bienes y Empresas de Nacionales de los Estados Unidos de América.

Para la amortización de dichos bonos y como garantía de los mismos, este Fondo creado por el Estado cubano se nutriría anualmente con el 25 por ciento de las divisas extranjeras que correspondieran al exceso de las compras de azúcares que cada año calendario realizaran los Estados Unidos de Norteamérica sobre tres millones de toneladas largas españolas para su consumo interno y a un precio no menor de 5.75 centavos de dólar la libra inglesa (F.A.S.).

Si el Gobierno de Estados Unidos hubiese respaldado esta fórmula, además de proveer los fondos para la indemnización, habría resultado económicamente favorable al contribuyente norteamericano, con precios probablemente menores a los que prevalecieron en el mercado interno.

Pero como expresión de sus despiadadas intenciones, lo que hizo la Casa Blanca fue dictar la proclama presidencial 3355, del 6 de julio de 1960, cancelando la cuota azucarera para lo que restaba del año 1960, y meses después la suprimió totalmente. Con ello, eliminó la capacidad de pago para indemnizar las nacionalizaciones a los ciudadanos norteamericanos.



GACETA OFICIAL

DE LA REPUBLICA DE CUBA

EDICION EXTRAORDINARIA

Dirección, Archivos y Biblioteca:
Edificio del Ministerio de Gobernación: Luz y Aguacate
Teléfono: 5-7815

LA HABANA, SABADO 15 DE OCTUBRE DE 1960

Administración:
O'Reilly No 237, entre Cuba y Aguacate
Horario: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

ANO LVIII—Tomo Quincuagésimo Número XIX

Número Anual 24

Página 1

PODER EJECUTIVO-MINISTERIOS

(Copia Corregida)

OSVALDO DORTICOS TORRADO, Presidente de la República de Cuba

Hago Saber: Que el Consejo de Ministros ha acordado y yo he sancionado lo siguiente:

Por Cuanto: La obra creadora de la Revolución, en sus múltiples aspectos, está basada fundamentalmente en el pleno desarrollo económico de la Nación.

Por Cuanto: Es evidente que ese desarrollo no puede lograrse sino mediante la planificación adecuada de la economía, el aumento y racionalización progresiva de la producción y el control nacional de las industrias básicas del país.

Por Cuanto: Muchas de las grandes empresas privadas del país lejos de asumir una conducta consecuente con los objetivos y metas de la transformación revolucionaria de la economía nacional, han seguido una política contraria a los intereses de la Revolución y del desarrollo económico, cuyos signos más evidentes y notorios han sido el sabotaje a la producción; la extracción del numerario sin reversiones adecuadas; la utilización exagerada de los medios de financiamientos sin empleo del propio capital operativo con la ostensible finalidad de acumular efectivo y de invertir en el extranjero previa obtención clandestina de divisas; y el abandono frecuente de la dirección directa de las fábricas lo que, en muchas ocasiones, ha obligado a la intervención por el Ministerio del Trabajo en evitación preventiva de la crisis laboral que el cierre o la disminución de la producción puedan crear.

Por Cuanto: Esa conducta resulta aún más difícilmente contraria a los intereses de la Revolución por ocurrir a pesar de que ha aumentado considerablemente el consumo del país y, por consiguiente, se ha ampliado el mercado interno para dichas empresas.

Por Cuanto: El desarrollo económico de la Nación ha requerido, como condición ineludible, la radical transformación de la estructura de nuestro comercio exterior, para lo cual se ha impuesto el control nacional de las importaciones mediante el funcionamiento del "Banco para el Comercio Exterior de Cuba" y es evidente que la subsistencia de las grandes empresas importadoras que operan bajo el solo estímulo de la ganancia y que como intermediarias en el mecanismo de la distribución no cumplen ya función alguna en la economía nacional, constituye un obstáculo a la ejecución de la nueva política de comercio exterior.

Por Cuanto: Las prácticas egoístas y anti-nacionales expresadas en el terror Por Cuanto en muchos casos han obligado a la intervención por organismos estatales de empresas privadas, creando por otra parte alarma y confusión en sectores a cuya participación en la economía del país no se oponen los lineamientos fundamentales de la planificación económica del Gobierno Revolucionario.

Por Cuanto: El proceso revolucionario impone la necesidad de dictar leyes cuyo contenido de beneficio popular tienda a liquidar los privilegios de ciertos núcleos económicos, los que, reaccionando violentamente, morosos y violaron una ley, llegando aún al extremo de financiar con los dineros mal adquiridos a grupos de contrarrevolucionarios en franca alianza con el imperialismo financiero internacional y constituye la mejor respuesta a esas actividades que el Gobierno Revolucionario, con serena valentía, promulga las leyes necesarias a la defensa y consolidación de la Revolución Cubana.

Por Cuanto: Es deber del Gobierno Revolucionario tomar las medidas que demandan las circunstancias expuestas en los Por Cuantos anteriores y adoptar fórmulas que liquiden definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiran contra el pueblo, procediendo a la nacionalización de las grandes empresas industriales y comerciales que no se han adaptado ni se podrán adaptar jamás a la realidad revolucionaria de nuestra Patria, y a la vez a brindar efectivas garantías y a facilitar por distintos medios el normal desenvolvimiento de todas aquellas empresas pequeñas y medias cuyos intereses pueden y deben coincidir con los grandes intereses de la Nación.

En la Gaceta Oficial de la República de Cuba de la época están publicadas todas las medidas de nacionalización y de expropiación a los malversadores.

Inaplicable y sin valor ni efecto jurídico

Cualquier análisis objetivo a tenor de las normas del Derecho Internacional concluirá que las expropiaciones decididas tuvieron por motivación dotar al pueblo cubano de un modo y una calidad de vida dignos. No existió violación alguna de tratado por el Gobierno de Cuba al momento de su decisión nacionalizadora, ni esta constituyó represalia contra la política singular de un Estado o de un grupo de Estados, sino la determinación de crear condiciones primarias y necesarias para el desarrollo social, económico y político de la nación.

Por eso, la Ley 80, LEY DE REAFIRMACIÓN DE LA DIGNIDAD Y SOBERANÍA CUBANAS, además de declarar ilícita la Helms-Burton, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno, considera nula toda reclamación amparada en ella de persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.

No obstante, establece que las indemnizaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas en virtud de ese proceso legítimo, validado por las leyes cubanas y el Derecho

Internacional, podrán formar parte de un proceso negociador entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de Cuba, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo. Y establece como principio jurídico que las reclamaciones de indemnización por la nacionalización de dichas propiedades deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno de Estados Unidos.

De la misma manera, la Ley cubana determina que quedará excluida de futuras posibles negociaciones cualquier persona natural o jurídica de los Estados Unidos de América que utilice los procedimientos y mecanismos de la Ley Helms-Burton, se acoja a estos o trate de emplearlos en perjuicio de otros.

Las aberradas pretensiones de apoderarse de Cuba vuelven a agudizar el conflicto y, una vez más, cometen el mismo error: subestimar la vocación patriótica e independentista de los cubanos.